



Disposiciones normativas de interés para las Entidades Locales dictadas para la gestión de la crisis sanitaria motivada por el virus COVID-19

(Publicaciones del 11 de marzo a 8 de mayo de 2020)

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.

(BOE 11/3/2020; vigencia 12/3/2020)

Con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad originada por el virus COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud como emergencia de salud pública de importancia internacional, y así mantener la protección social de los trabajadores por cuenta propia o ajena, en el artículo 5 de este Real Decreto-ley se establece que **los periodos de aislamiento o contagio** de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 **tendrán la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo** a los solos efectos de la prestación económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.

La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

(BOE 13/3/2020; vigencia 13/3/2020; corrección de errores en BOE 25/3/2020)

(modificado por Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y por el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo)

De entre las distintas medidas adoptadas mediante este Real Decreto-ley, destacamos la recogida **en materia de contratación** en su **art. 16** (objeto de modificación posterior por el Real Decreto-ley 8/2020 así como por el Real Decreto-ley 9/2020), en virtud del cual a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de **aplicación la tramitación de emergencia**, regulada en el art. artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación la exigencia de garantía, siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías.

El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 podrá realizarse a justificar.



**Gobierno
de La Rioja**

Finalmente, la Disposición transitoria única reconoce la aplicación de lo dispuesto en este artículo 16 a los contratos necesarios para hacer frente a la situación objeto de este real decreto-ley, cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a su entrada en vigor (además lógicamente de a aquéllos cuya tramitación se haya iniciado con posterioridad).

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

(BOE 14/3/2020; vigencia 14/3/2020)

(Modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, BOE 18/3/2020; y por Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, BOE 25/4/2020).

Con fecha 14 de marzo, y ante la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, mediante este Real Decreto el Gobierno procedió a declarar el **estado de alarma en todo el territorio nacional** por un plazo inicial de 15 días, que ha sido objeto con posterioridad de tres prórrogas, cada una de ellas por 15 días, mediante los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo, Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, y Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, previas las respectivas autorizaciones del Congreso de los Diputados, continuando vigente en la actualidad, en virtud de esa tercera prórroga, hasta las 00.00 horas del día 10 de mayo. No obstante, es inminente la declaración por el Gobierno de una cuarta prórroga del estado de la alarma, al haber sido ya autorizada por el Congreso de los Diputados, que se prolongará hasta la 00.00 horas del día 24 de mayo.

Entre las medidas que se adoptan mediante el Real Decreto 463/2020, en su versión consolidada, destacamos las siguientes:

1) Autoridad competente: El art. 4 indica que, a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será **el Gobierno**, si bien el art. 6 contempla que los actos, disposiciones y medidas necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables.

Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo (Art. 5).



**Gobierno
de La Rioja**

2) Gestión ordinaria de los servicios: Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma, sin perjuicio de lo señalado para los Cuerpos de la Policía Local y las competencias del Gobierno señaladas en las áreas de responsabilidad contempladas en el artículo 4 (art. 6).

A estos efectos, interesa resaltar la habilitación contenida en la Disposición Adicional Primera del RD-Ley 10/2020, de 29 de marzo, conforme al cual *“el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales”*.

A la vista de lo anterior, es posible y recomendable que en el ámbito de cada Entidad local se precise qué servicios públicos se consideran esenciales en su correspondiente término municipal para la protección de las personas y/o para el funcionamiento adecuado de sus servicios durante la vigencia del estado de alarma, correspondiendo al Alcalde la competencia para ello, en base al artículo 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre de las Resoluciones dictadas en tal sentido.

3) Limitación de la libertad de circulación de las personas: Durante la vigencia del estado de alarma se limita la circulación de las personas únicamente para la realización de las actividades establecidas en el artículo 7 del Real Decreto, para lo que el Gobierno podrá llevar a cabo una serie de medidas. Este precepto fue modificado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, al objeto de introducir modificaciones orientadas a reforzar la protección de la salud pública y asegurar, así, el funcionamiento de servicios públicos esenciales. Posteriormente, ha sido modificado por el Real Decreto 492/2020, de 24 abril, al objeto de permitir que los menores de 14 años puedan acompañar a los adultos responsables de su cuidado en los desplazamientos que estos pueden realizar.

Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.

* En la actualidad, se han flexibilizado las restricciones iniciales a la libertad de circulación mediante distintas Órdenes ministeriales, destacando aquí la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.



**Gobierno
de La Rioja**

4) Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias: Las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en el real decreto (art. 8).

5) Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, cultural, recreativa, hostelería y restauración, lugares de culto y ceremonias civiles y religiosas: Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, con excepción de los que se indican en el art. 10. Asimismo, se suspende la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, monumentos, y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del real decreto. Asimismo, se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio, así como las verbenas, desfiles y fiestas populares.

La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas se condiciona a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeración de personas.

El Anexo del RD 463/2020, de 14 de marzo, prevé una relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, y por tanto no se consideran esenciales. Entre otros destacar a modo ejemplificativo: Museos, Archivos, Bibliotecas, Monumentos, Espectáculos públicos. Auditorios, Cines, Instalaciones taurinas, Pabellones de Congresos, Salas de conciertos, de conferencias, de exposiciones, multiuso, o Teatros. Campos de fútbol, rugby, béisbol, baloncesto, balonmano, de tiro al plato o de pichón, pistas de tenis, de patinaje o de hockey sobre hielo, piscinas, frontones, polideportivos, gimnasios o estadios. Parques de atracciones, acuáticos, zoológicos, de recreación infantil, así como ferias.

El apartado 6 del art. 10 (modificado por el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril) contiene una habilitación al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores del precepto, por razones justificadas de salud pública, con el alcance y ámbito territorial que específicamente se determine.

***** Medidas de flexibilización durante la etapa de transición hacia la “nueva normalidad”.**

En el momento actual, España ha iniciado un proceso de reducción gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social establecidas mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. De esta manera, el pasado 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la consecución de la normalidad, accesible a través del siguiente enlace:

<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm>

Dicho Plan contempla una transición gradual por territorios en función de sus capacidades estratégicas, sus indicadores epidemiológicos de evolución de la



**Gobierno
de La Rioja**

epidemia, así como sus indicadores de movilidad, económicos y sociales, de modo que a medida que se vayan dando las circunstancias oportunas, las medidas restrictivas de carácter general puedan ser progresivamente sustituidas por otras de carácter específico adaptadas a las particularidades de los diferentes grupos de población, tipos de actividades que se pretenden reactivar, e intensidad de la crisis sanitaria en los territorios.

Este proceso articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3, ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.

En ese contexto, se han publicado en el BOE de 3 de mayo de 2020, la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado. Ambas órdenes entraron en vigor el día 4 de mayo.

La Rioja se encuentra actualmente, desde el día 4 de mayo, en la Fase 0 del Plan para la transición, habiendo solicitado formalmente al Gobierno su pase a la Fase 1, que comienza el próximo día 11 de mayo, estando pendiente en el momento actual su aprobación a esa nueva fase.

6) Medidas en materia de transportes: Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público, mantendrán su oferta de transporte.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación de los mismos (art. 14).

7) Medios de comunicación de titularidad pública y privada: Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir (art. 19).

8) Suspensión de plazos administrativos: En lo que respecta a la actuación administrativa, la **Disposición adicional tercera** recoge la suspensión de plazos administrativos, en los siguientes términos:

«1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.



**Gobierno
de La Rioja**

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.

No obstante, se contemplan las siguientes **excepciones** a la regla general de la suspensión de plazos administrativos:

- Apartado 3: El órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad; o bien cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
- Apartado 4 (modificado por el Real Decreto 465/2020): las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de los siguientes procedimientos administrativos:
 - aquéllos referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma;
 - aquéllos que sean indispensables para la protección del interés general;
 - aquéllos que sean indispensables para el funcionamiento básico de los servicios.

**** No obstante, en materia de contratación, la Disposición adicional 8ª del Real Decreto-ley 17/2020, en vigor desde el día 6 de mayo, ha acordado el levantamiento de la suspensión de términos e interrupción de plazos de los procedimientos de contratación, así como permitido el inicio de nuevos procedimientos de contratación, siempre y cuando se tramiten por medios electrónicos (nos remitimos al análisis del Real Decreto-Ley 17/2020 que se realiza más adelante).**

- Finalmente, los apartados 5 y 6, introducidos por el Real Decreto 465/2020, puntualizan que la suspensión de los plazos no será de aplicación, a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, ni a los plazos tributarios (sujetos a normativa especial), ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-1.

(BOE 18/3/2020; vigencia 18/3/2020)

(Modificado por Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, Real Decreto-ley 15/2020, de 22 de abril y Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo)

Entre las medidas adoptadas por este Real Decreto-ley, destacamos las siguientes:

1.- Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019.

El artículo 3 de este Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, permite a las Entidades locales destinar el superávit presupuestario correspondiente al año 2019 para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23 “Servicios Sociales y promoción social, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad



**Gobierno
de La Rioja**

presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se consideran con carácter excepcional y a los exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del artículo 1 de este Real Decreto-ley.

Las actuaciones a las que puede destinarse el superávit serán las comprendidas en el Artículo 1.2 del Real Decreto-ley 8/2020. Las aplicaciones presupuestarias que se doten para aplicar el superávit deberán encontrarse en cuanto a su clasificación por programas en la política de gasto 23 “Servicios Sociales y promoción social”, recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.

En cuanto a la clasificación económica, podrá tratarse de gastos de los Capítulos 1, 2, 4 y 6, en función de las actuaciones a las que se apliquen los gastos.

Mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se ha desarrollado esta posibilidad de aplicación del superávit presupuestario, en los términos que se expondrán en su epígrafe correspondiente.

2.- Carácter preferente del trabajo a distancia, adaptación del horario y reducción de jornada.

Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la presente norma tienen por objetivo garantizar que las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. A tal fin, según el artículo 5, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo adoptarse las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado.

Por otra parte, según el artículo 6 del RDL 8/2020, las personas trabajadoras que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma, cuando concurren circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

Ambas medidas, propias de las relaciones de trabajo amparadas en el marco del Estatuto de los Trabajadores, pueden servir de referencia a los Ayuntamientos para adaptar de forma transitoria el cumplimiento de la jornada de sus empleados públicos. Asimismo, éstos pueden tomar como modelo las adoptadas por la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 10 de marzo de 2020, de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado, que prioriza el trabajo a distancia y facilita la adaptación y/o reducción de la jornada de los empleados públicos.

3.- Plazos en el ámbito tributario.

Conviene comenzar recordando que, conforme al apartado 6 de la Disposición adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma (introducido por el Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que



se modifica el Real Decreto 463/2020), *“La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.”*

El Real Decreto-Ley 8/2020, en su art. 33, viene a establecer un mecanismo de diferimiento de los plazos de tramitación de los procedimientos tributarios e interrupción de los plazos de prescripción y caducidad, debiendo remarcarse que, como resulta de su propia Disposición adicional novena, no estamos ante una suspensión, sino ante una “ampliación de plazo”, durante el cual tanto el contribuyente como la Administración pueden realizar actuaciones.

En aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, en el art. 33 **se flexibilizan los plazos para el pago, ampliándolos, tanto en período voluntario como en período ejecutivo**, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento, fijándose una fecha final de la ampliación de los plazos que, inicialmente fue hasta el 30 de abril o hasta el 20 de mayo, pero que, posteriormente, mediante la Disposición adicional 1ª del Real Decreto-Ley 15/2020, de 22 de abril, se ha ampliado **hasta el 30 de mayo**, independientemente de la fecha de inicio del trámite (ya sea previa o posterior a la entrada en vigor del propio Real Decreto-ley 8/2020).

El obligado tributario podrá, no obstante, si así lo prefiere, atender los requerimientos o solicitudes de información o presentar sus alegaciones en cualquier momento anterior al nuevo plazo fijado por el RD 8/2020, considerándose en tal caso evacuado el trámite.

Por otra parte, el período entre la entrada en vigor del RD-ley 8/2020 (18 de marzo) y el 30 de abril no computará a efectos de los plazos de prescripción ni de caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.

Respecto a su ámbito de aplicación, las normas tributarias recogidas en el art. 33:

- se aplican tanto a los procedimientos ya iniciados a su entrada en vigor, el 18 de marzo de 2020 (disposición transitoria tercera), como aquellos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida;
- resultan plenamente **de aplicación en el ámbito de las entidades Locales**, como expresamente ha venido a reconocer con posterioridad el art. 53 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y ello tanto respecto a las actuaciones, trámites y procedimientos que realicen y se rijan por lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, como respecto a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- y resulta de aplicación a la gestión no sólo de las deudas tributarias sino respecto a todos los ingresos de derecho público, tal y como ha venido a aclarar con posterioridad la Disposición adicional 9ª del Real Decreto-ley 11/2020.



**Gobierno
de La Rioja**

Asimismo, la Disposición Adicional 9ª del RDL 11/2020 ha aclarado que, en el ámbito de las Entidades locales, el período comprendido desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril de 2020, no computará a efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos económico-administrativos. En ese mismo período, quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.

Finalmente conviene indicar que, dado que el RD 8/2020 no desarrolla el régimen previsto para los **plazos de los padrones de cobro de los ingresos de notificación periódica y colectiva** (IBI, por ejemplo), doctrinalmente se ha entendido que será potestad de los distintos municipios la fijación de los distintos calendarios de pago a través de los anuncios de cobranza, pudiéndose ampliar los plazos de pago por el tiempo que se considere necesario, en los términos que se determinen, en función de que su puesta al cobro sea anual, semestral o cuatrimestral. Estas medidas deberían recogerse en acuerdo expreso de la Entidad Local que, de no poder ser adoptado por Pleno o Junta de Gobierno, por imposibilidad de su celebración durante la vigencia del estado de alarma, podrían adoptarse por el Alcalde al amparo del art. 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladoras de las Bases de Régimen Local, dando cuenta al órgano competente en la primera sesión que se celebre, para su ratificación.

4.- Medidas en materia de contratación pública.

El **artículo 34** del RDL 8/2020 establece diferentes medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, impidiendo la resolución de contratos públicos, y evitar que el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales tengan un impacto estructural negativo sobre esta parte del tejido productivo.

Así, regula un **régimen de suspensión singular** y exorbitante aplicable a determinados contratos, vigentes en el momento de la entrada en vigor del estado de alarma, cuya ejecución haya devenido imposible como consecuencia del estado de alarma, así como un régimen peculiar de indemnizaciones al contratista por los daños y perjuicios que aquella suspensión le irroque. Esta regulación especial sustituye y desplaza al régimen ordinario de suspensión de contratos e indemnizaciones anejas regulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Este precepto ha sido modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, así como por el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, con efectos que se retrotraen a la fecha de entrada en vigor del propio Real Decreto-ley 8/2020, es decir, con efectos desde el día 18 de marzo.

Mediante esa última modificación operada por el Real Decreto-ley 17/2020, la aplicación de este régimen de suspensión se ha hecho extensible no sólo a los contratos sujetos a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como inicialmente preveía el apartado 7 del precepto, sino también a los contratos de obras, servicios o consultorías y asistencias que sean complementarios a un contrato de obras principal y necesarios para la correcta realización de la prestación, así como los contratos de concesión, ya sean de obras o de servicios,



incluidos los contratos de gestión de servicios públicos, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, siempre que estén vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley y cualquiera que sea la normativa de contratación pública a la que estén sujetos con arreglo al pliego. Se precisa que en estos contratos no resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente artículo, además de las disposiciones señaladas en sus apartados 1 y 3, lo dispuesto en los artículos relativos a indemnizaciones por suspensiones de contratos en la normativa de contratación pública anterior al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que sea aplicable a los mismos.

Para mayor claridad, el resumen que a continuación se expone se hará en referencia al texto consolidado actualmente vigente.

4.1.- Contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a 18/03/2020 (apartado 1):

- Aquellos contratos de esta tipología cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

Mediante la modificación operada por el Real Decreto-ley 11/2020 en el apartado 1 de este precepto, se puntualizó que la suspensión del contrato podrá ser total o parcial, según los casos, teniendo en cuenta que, de ser parcial, los daños y perjuicios a abonar serán sólo los correspondientes a la parte del contrato suspendida.

Cuando la ejecución de un contrato quedará en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. A este respecto, los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado son los indicados en el artículo 34.1 del RDL 8/2020 (y no los indicados en la LCSP). Entre ello, se encuentran los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal adscrito a la ejecución del contrato a fecha de 14 de marzo, durante el período de suspensión, habiéndose añadido un apartado 8 (mediante RDL 11/2020), para puntualizar que los gastos salariales a los que se hace alusión en el art. 34, incluirán los relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondieran.

Mediante la modificación operada por el Real Decreto-ley 17/2020, se ha habilitado la posibilidad, respecto de estos contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan quedado suspendidos como consecuencia del COVID-19, de que el órgano de contratación pueda conceder, a instancia del contratista, un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemnización que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en un solo pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo que el mismo se asegure



**Gobierno
de La Rioja**

mediante cualquiera de las formas de garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El precepto articula un procedimiento para la declaración de la suspensión que se tramita a instancias del contratista. Así, se establece que la aplicación de lo dispuesto previamente solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de las circunstancias excepcionales inicialmente descritas. Con esta finalidad, el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando, entre otros motivos, las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible y los medios personales y materiales adscritos a la ejecución del contrato. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, ésta deberá entenderse desestimatoria.

La Abogacía del Estado en su informe de 1 de abril de 2020 ha interpretado que si el órgano de contratación estima la solicitud del contratista, su acto es meramente declarativo de una suspensión cuyos efectos hay que entender que se retrotraen hasta el momento en el que se produjo el supuesto de hecho y hasta que la prestación pueda reanudarse. Si el órgano de contratación considera que no es imposible ejecutar el contrato, denegará la solicitud del contratista, sin perjuicio de los recursos que procedan contra la decisión administrativa. En caso de falta de contestación en plazo, el silencio es negativo y debe entenderse desestimada la solicitud del contratista.

- Prórroga de contrato: se establece que cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contratación derivada de la declaración del estado de alarma, y no pudiera formalizarse el correspondiente nuevo contrato, se podrá prorrogar el contrato originario, con independencia de la fecha de publicación de la licitación de dicho nuevo expediente.

- Se subraya que la suspensión de los contratos por este motivo, no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los mismos.

4.2.- Contratos de servicios y de suministros distintos de los referidos en el supuesto anterior, vigentes a 18/03/2020 (apartado 2):

Siempre que estos contratos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación creada, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro plazo menor.

El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del director de obra del contrato, donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del



**Gobierno
de La Rioja**

COVID-19. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato.

El contratista tendrá derecho al abono de los gastos salariales adicionales en los que hubiera incurrido como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 del precio inicial del contrato. Solo se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos.

Apartado 6: Lo previsto en este precepto para los contratos de servicio y suministro, sean o no de tracto sucesivo, es de aplicación a todos los contratos sujetos a la LCSP, pero no será de aplicación, entre otros, a los contratos de servicios o suministros vinculados a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, a los contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos y a los contratos de servicios o suministros necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

No obstante, mediante Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se modificó este art. 33, entre otros aspectos, para puntualizar, en su apartado 6, que los contratos de servicios de seguridad y limpieza, inicialmente excluidos del régimen de suspensiones previsto en el art. 34, podrán ser objeto de suspensión total o parcial, en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo, a instancia del contratista o de oficio, si como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el COVID 19, alguno o algunos de sus edificios o instalaciones públicas quedaran cerrados total o parcialmente deviniendo imposible que el contratista preste la totalidad o parte de los servicios contratados.

4.3.- Contratos de obras vigentes a 18/03/2020 (apartado 3):

- Siempre y cuando éstos contratos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.

Se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

La aplicación de lo previamente dispuesto solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita. Con esta finalidad, el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación reflejando, entre otras circunstancias, las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido imposible y los medios personales y materiales adscritos a su ejecución. Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.



**Gobierno
de La Rioja**

- Respecto a aquellos contratos de obra en los que, de acuerdo con el “programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra”, estuviese prevista la finalización de su plazo de ejecución entre el 14 de marzo de 2020, fecha de inicio del estado de alarma, y durante el período que dure el mismo, y como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado no pueda tener lugar la entrega de la obra, el contratista podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final, siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.

- Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables los conceptos descritos en el apartado 3 del artículo 34 del RDL 8/2020.

4.4.- Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios vigentes a 18/03/2020 (apartado 4):

Ante la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el Estado para combatirlo, el concesionario tendrá derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100, o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato.

Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales salariales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos en la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de duración de la situación de hecho creada por el COVID-19. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, efectividad, e importe por el contratista de dichos gastos.

La aplicación de lo previamente dispuesto sólo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de la situación descrita, y solamente (como se ha precisado mediante la modificación operada por el Real Decreto-ley 17/2020), respecto de aquella parte del contrato afectado por dicha imposibilidad.

***La disposición adicional novena del RDL 8/2020 puntualiza que a los plazos previstos en el presente RDL no les será de aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma.

Según su disposición final novena, las medidas previstas en el mismo mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley.



Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

(BOE 28/3/2020; vigencia 28/3/2020)

De entre las distintas medidas que incorpora, destacamos las siguientes:

1) Mantenimiento de actividad de centros sanitarios y centros de atención a personas mayores (art. 1): Durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, se entenderán como servicios esenciales para la consecución de los fines descritos en el mismo, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el régimen de gestión, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que determine el Ministerio de Sanidad, así como los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, en los términos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

De conformidad con dicho carácter esencial, dichos establecimientos deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes

2). Medidas extraordinarias para la protección del empleo (art. 2): La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

3) Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales (art. 5): La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19

(BOE 29/3/2020; vigencia 29/3/2020)

- Con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, mediante este Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, se regula un **permiso retribuido recuperable** para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, incluyendo en su ámbito de aplicación a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como



**Gobierno
de La Rioja**

consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; quedando exceptuadas:

- Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
- Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
- Las personas trabajadoras contratadas por:
 - Aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión;
 - y Aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.
- Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
- Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.
- Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, que conllevará que conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, debiendo recuperar posteriormente las horas de trabajo no prestadas durante dicho permiso retribuido, una vez finalizada la vigencia del estado de alarma. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras, debiendo tenerse presente que esas horas no podrá suponer el incumplimiento de los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, ni la superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente
- La Disposición adicional quinta establece, que el permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y suministros del sector público que sean indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

**** Respecto a empleados públicos, hay que acudir a la Disposición Adicional Primera de este Real Decreto-ley, del siguiente tenor literal: «El Ministerio de Política Territorial**



**Gobierno
de La Rioja**

y Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales».

****Con posterioridad, en el Boletín Oficial del Estado de 30 de marzo, se publica la Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo, con el objeto de especificar las actividades excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, así como facilitar un modelo de declaración responsable en la que se indique que la persona trabajadora portadora del mismo puede continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo de su actividad de representación sindical o empresarial.**

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

(BOE 1/4/2020; vigencia 2/4/2020)

(modificado por el Real Decreto-ley 15/2020, de 22 de abril)

Entre las numerosas medidas que contempla, destacamos las siguientes novedades, por su mayor repercusión para el ámbito de la Administración Local.

1) Importe del superávit presupuestario del 2019 aplicable a la financiación de gastos incluidos en la Política de gasto 23 “Servicios sociales y promoción social” y tramitación de las modificaciones presupuestarias necesarias para aplicar el superávit presupuestario.

Como se expuso en su epígrafe correspondiente, el artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, permite a las Entidades locales **destinar el superávit presupuestario correspondiente al año 2019 para financiar tanto gastos de inversión como** corrientes incluidos en la política de gasto 23 “Servicios Sociales y promoción social, previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El art. 20 de este Real Decreto-ley 11/2020 aclara determinadas cuestiones al respecto, e introduce una forma de tramitación excepcional de las modificaciones presupuestarias que se deban acometer para articular la aplicación del superávit, ante la imposibilidad o dificultad de celebración de sesiones plenarios durante la vigencia del estado de alerta.



**Gobierno
de La Rioja**

A este respecto, el art. 20 del RDL 11/2020 viene a establecer lo siguiente:

- El **importe** que podrá destinar cada entidad local al gasto referido será como máximo equivalente al **20 por 100 del saldo positivo definido en la letra c) del apartado 2 de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012**, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Las modificaciones presupuestarias que deban aprobarse para aplicar en 2020 ese superávit presupuestario, ya sea en forma de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, podrán tramitarse por decreto o resolución del Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente. Se aclara que la falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-administrativa, para lo que el cómputo de plazos se producirá a partir de la fecha de publicación del acuerdo plenario.
- Se establece la obligación de remitir electrónicamente al Ministerio de Hacienda el formulario recogido en el Anexo III del RDL, a través de la Intervención, habilitándose a este Ministerio para la regulación de los plazos y procedimientos para ello.

2) Plazos de formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 y de remisión de la Cuenta General al Tribunal de Cuentas.

El artículo 48 del RDL 11/2020 establece que si bien las entidades del sector público (también las locales) procurarán formular y rendir las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 de acuerdo a los plazos previstos en la normativa, de no ser ello posible con motivo de la declaración del estado de alarma, y así fuera acordado y comunicado por el cuentadante a la Intervención General, quedarán suspendidos los plazos desde la declaración del estado de alarma, reanudándose cuando finalice su vigencia o ampliándose el plazo previsto en un período equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.

De la misma forma se suspenderán y se reanudarán los plazos previstos en la normativa reguladora de la remisión de las cuentas y el resto de la información financiera al Tribunal de Cuentas.

3) Refuerzo de las obligaciones de suministro de información económico-financiera sobre los efectos derivados de las actuaciones acometidas en relación con la gestión del COVID-19.

El artículo 51 del RDL 11/2020 establece el deber de remisión al Ministerio de Hacienda de información económico-financiera sobre los efectos derivados de las actuaciones acometidas para la gestión de la situación de alarma generada por el COVID-19, deber que para las Entidades locales se concreta en la remisión por la Intervención, con periodicidad trimestral y de forma electrónica, de la información



**Gobierno
de La Rioja**

recogida en los Anexos II y III de este RDL, remitiendo al Ministerio de Hacienda la regulación concreta de los plazos y procedimientos para ello.

4) Plazos en el ámbito tributario.

Nos remitimos en este punto al análisis realizado en el comentario a las medidas del art. 33 del RDL 8/2020, de 17 de marzo.

5) Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas.

El artículo 54 del RDL 11/2020 permite que las órdenes y resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (concurcencia competitiva), que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del estado de alarma, puedan ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, y ello aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases reguladoras. A estos efectos, bastará con que el órgano competente justifique la imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma así como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la actividad subvencionada o su justificación o comprobación.

También se permite que las resoluciones y convenios de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (concesión directa) puedan ser modificadas, a instancia del beneficiario. No obstante, en el caso de que el objeto de la subvención sea la financiación de los gastos de funcionamiento de una entidad, el plazo de ejecución establecido inicialmente no podrá ser modificado.

6) Reinicio de plazos para recurrir en vía administrativa y ampliación de los plazos para recurrir en el ámbito tributario.

- La Disposición Adicional 8ª del RDL 11/2020 establece que el cómputo de los plazos para la interposición de recursos en vía administrativa se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización del estado de alarma, y ello con independencia del tiempo que ya hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Es decir, que los plazos para la interposición de recursos administrativos no se reanudarán cuando finalice la vigencia del estado de alarma, sino que se reiniciarán.

- En particular, en el ámbito tributario, desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el 30 de mayo de 2020. Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo



**Gobierno
de La Rioja**

(*tégase en cuenta que, conforme a la D.A.1ª del Real Decreto-ley 15/2020, de 22 de abril, las referencias que inicialmente hacían las disposiciones adicionales octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, al 30 de abril, deben entenderse hechas al 30 de mayo).

7) Aplicación de las medidas del art. 33 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, a la resolución de reclamaciones económico-administrativas en el ámbito de las entidades locales.

Nos remitimos en este punto al análisis que del citado precepto se efectuó en su epígrafe correspondiente.

8) Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en lo relativo a la suspensión de los contratos administrativos.

El RDL 11/2020 modifica numerosos preceptos del RDL 8/2020, entre los que destaca la modificación de su art. 34, regulador del régimen especial de suspensión de contratos administrativos vigentes a la entrada en vigor del estado de alarma y cuya ejecución hubiera devenido imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por las Administraciones para combatirlo, así como el régimen de indemnizaciones que la entidad adjudicadora debe abonar al contratista por los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el período de suspensión.

Nos remitimos en este punto a lo explicado al respecto en el análisis del Real Decreto-Ley 8/2020.

9) Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.-

La Disposición Final 2ª modifica su art. 46, para introducir un nuevo apartado 3, en el que se habilita la posibilidad para que los órganos colegiados de las Entidades Locales puedan constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, en los siguientes términos literales:

«3. En todo caso, cuando concurren situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación



**Gobierno
de La Rioja**

política de sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten».

Por tanto, queda habilita legalmente la posibilidad de que los órganos colegiados decisorios de las Entidades Locales (Pleno y Junta de gobierno local) puedan celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia, por medios electrónicos y telemáticos, y ello aunque no esté previsto en un Reglamento Orgánico Municipal, si bien, a la vista de su tenor literal, la posibilidad se limita a situaciones muy excepcionales, como es la actual que se está viviendo como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

10) Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.-

La Disposición Final 7º modifica el art. 29.4 de la LCSP para ampliar a los contratos de suministro la posibilidad excepcional, anteriormente sólo prevista para los **contratos de servicios, de ampliación del plazo inicial de duración**, más allá del plazo máximo de duración de 5 años, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato, en las condiciones establecidas en el mismo.

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

(BOE 15/4/2020; vigencia 15/4/2020)

En virtud de lo dispuesto en su artículo único, en el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, por parte de los obligados que tengan la consideración de Administraciones Públicas y cuyo último presupuesto anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros, cuyo vencimiento se produzca a partir del 15 de abril de 2020 y **hasta el día 20 de mayo de 2020** se extenderán hasta esta fecha. En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.

Interesa recalcar que lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación en aquellos Ayuntamientos cuyo último presupuesto aprobado no supere los 600.000 euros, a efectos de la presentación de las declaraciones tributarias respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido que previamente ha repercutido al consumidor final, por ejemplo la deducción del IVA por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, sin perjuicio de otros supuestos que pudieran existir.



**Gobierno
de La Rioja**

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

(BOE 22/4/2020; vigencia 23/04/2020)

(modificado por el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo)

De entre las distintas medidas adoptadas por este Real Decreto-ley, destacamos las siguientes:

1) Extensión de los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (D.A.1ª).

Nos remitimos a lo expuesto en el análisis al texto consolidado de los respectivos Reales Decretos-leyes.

2) Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En su Disposición Final 7ª modifica la **letra d) del apartado 4 del artículo 159 de la LCSP**, regulador del procedimiento de contratación abierto simplificado, para establecer que el acto de apertura de las ofertas, en lo relativo a los criterios de adjudicación automáticos, no será público cuando éstas se hayan presentado por medios electrónicos, extendiendo así a esta modalidad de procedimiento la norma que ya regía para el procedimiento abierto normal.

Asimismo, se corrige la redacción del precepto en lo relativo a la forma de presentación de las ofertas, ya que únicamente se señalaba que podían presentarse en sobres, añadiéndose ahora la referencia a archivos electrónicos.

3) Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

La D.F. 10ª añade un apartado 3 a la D.A. 8ª del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para puntualizar que la tramitación del recurso especial de contratación respecto de aquellos procedimientos contractuales sujetos al mismo y cuya continuación haya sido acordada por el órgano competente en base al apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, no podrá entenderse suspendida, es decir, no le es de aplicación la suspensión general de plazos administrativas establecida en el apartado 1 de esa D.A.3ª.

Asimismo, se aclara que en ningún caso será de aplicación la suspensión de plazos administrativos a aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por lo que los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los términos establecidos en dicha Ley.



**Gobierno
de La Rioja**

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

(BOE 29/4/2020; vigencia 30/04/2020)

De entre las distintas medidas adoptadas por este Real Decreto-ley, destacamos las siguientes:

1) Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

De nuevo se vuelve a modificar la regulación del procedimiento abierto simplificado contenida en el **art. 159.4**, afectando en esta ocasión de nuevo a su **letra d)** así como a su **letra f)**.

Con esta última modificación se persigue una mejora técnica en su regulación, terminando de suprimir toda referencia al acto público de apertura de ofertas, siempre y cuando éstas se hayan presentado electrónicamente, lo que implica además que al no haber acto público se elimina la referencia a la obligación de leer, al comienzo del acto de apertura de ofertas valorables automáticamente, el resultado de la valoración de las ofertas relativas a los criterios cuya valoración dependa de un juicio de valor, puesto que ha perdido su sentido.

Asimismo, se mejora la redacción añadiendo la referencia al archivo electrónico como forma de presentación de ofertas adicional a los sobres (recuérdese que la forma normal y obligatoria de presentación de ofertas es la electrónica, y únicamente cuando concurra alguna de las causas de la D.A. 15ª . apartado 3 podrán presentarse manualmente siempre que así se haya permitido motivadamente en el PCAP).

2) Medidas de carácter procesal.

La Administración de Justicia ha sufrido una ralentización significativa como consecuencia de la crisis del COVID-19. Se dicta este real decreto-ley con la finalidad de procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión, además de otras medidas concretas.

Destacamos las siguientes:

- **Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales**, que a efectos del artículo 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se declaran urgentes, **los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020**. Se exceptúan de esta previsión los sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.
- **Los términos y plazos** previstos en las leyes **procesales** que hubieran quedado **suspendidos** por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, **volverán a computarse desde su inicio**, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.



**Gobierno
de La Rioja**

- Se acuerda la **ampliación de los plazos para la presentación de recursos contra sentencias** y otras resoluciones que ponen fin al procedimiento y sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de los plazos procesales suspendidos, permitiendo de esta manera que estos puedan presentarse de forma escalonada en un plazo más prolongado de tiempo, y no concentrados en escasos días después del citado levantamiento.
- Se regula la **tramitación preferente de determinados procedimientos**, durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 2020. Entre otros, y por lo que aquí nos interesa resaltar, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se tramitarán de forma preferente los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones de las Administraciones Públicas por los que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas previstas legalmente para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

Resulta también de interés la **ampliación de plazos en el ámbito del Registro Civil** que se regula en la Disposición adicional primera. Cabe destacar en concreto que en los expedientes de autorización para contraer matrimonio en los que hubiera recaído resolución estimatoria se concederá automáticamente un plazo de un año para la celebración del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de alarma.

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

(BOE 6/5/2020; vigencia 7/5/2020)

De entre las distintas medias adoptadas mediante este Real Decreto-Ley, destacamos las siguientes adoptadas en materia de contratación.

1º) Continuación e inicio de los procedimientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de alarma.

La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha supuesto la suspensión de las licitaciones de los contratos públicos en general, salvo las excepciones que pudieran acordarse en base a lo dispuesto en sus apartados 2 y 3. Entendiendo que la prolongación de la duración del estado de alarma ha podido llegar a provocar perjuicios para los intereses públicos en ciertos casos, mediante este Real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión general impuesta a las licitaciones públicas, siempre y cuando se tramiten electrónicamente. Asimismo, y con el mismo requisito de tramitación electrónica, se permite el inicio de nuevos procedimientos de contratación.



**Gobierno
de La Rioja**

Así, la **Disposición adicional 8ª** del Real Decreto-ley 17/2020, establece literalmente lo siguiente:

*«A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley se acuerda el **levantamiento de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación** promovidos por entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, **siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos**. Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el **inicio de nuevos procedimientos de contratación** cuya tramitación se lleve a cabo **también por medios electrónicos**. Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos»*

2º) Medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música.-

Destacamos las siguientes:

2.1) Medidas en materia de contratación: Respecto de los **contratos de interpretación artística y de espectáculos de cuantía no superior a 50.000,00 €**, que hayan resultado **modificados o suspendidos como consecuencia del COVID-19**, el art. 4 habilita al órgano de contratación para acordar el abono de un anticipo al contratista de hasta un 30 por ciento del precio del contrato, como anticipo a cuenta de dicho precio, y sin que sea exigible la previa prestación de garantía por el contratista. Asimismo, cuando como consecuencia del COVID-19 tenga lugar la **resolución** de estos contratos, por la causa prevista en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la misma (es decir, por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato, o las modificaciones impliquen alteraciones del precio en cuantía superior al 20% del precio inicial), el órgano de contratación podrá acordar una indemnización a favor del contratista que no podrá ser inferior al 3, ni superior al 6 por ciento del precio del contrato (sin resultar en estos casos de aplicación lo previsto en el artículo 213.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que establece en estos casos una indemnización del 3% de la prestación dejada de percibir).

2.2) Medidas en materia de subvenciones: el art. 14 establece que serán abonados a los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas otorgadas para la realización de actividades, objetivos o proyectos culturales, aquellos gastos subvencionables debidamente acreditados y no recuperables en los que hayan incurrido para la realización del objetivo, proyecto o actividad subvencionados, cuando estos no hayan podido llevarse a cabo, total o parcialmente, como consecuencia del COVID-19.



**Gobierno
de La Rioja**

3º) Modificación de la regulación contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de los encargos a medios propios personificados.

La disposición final octava modifica la regulación de los encargos de entidades pertenecientes al Sector Público que no tengan la consideración de poder adjudicador a medios propios personificados, dando **nueva redacción a los apartados 2 y 3 del art. 33 de la LCSP**, con el fin de completar y precisar más su redacción, así como de facilitar que los órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas puedan ejercer las funciones que tienen conferidas con la máxima eficiencia y coordinación.

Así, se establece que el requisito del control exigido para la consideración de un medio propio personificado respecto de una entidad perteneciente al Sector Público que no tenga la consideración de poder adjudicador se remite al previsto para los poderes adjudicadores; y se precisa el régimen aplicable a los encargos que realicen entidades del Sector Público estatal a otras del mismo sector, extendiendo esta posibilidad a las Comunidades Autónomas dentro de su respectivo sector público.

4º) Modificación del art. 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

En este punto nos remitimos al comentario realizado a dicho Real Decreto-ley en el epígrafe respectivo.

Logroño, 8 de mayo de 2020
Servicio de Asesoramiento a Corporaciones Locales